



domingo 12 de diciembre de 2004

ABC.ES - EDICIÓN IMPRESA - Colaboraciones

CON LA INMENSA MINORÍA

Por Ignacio CAMACHO/

Algo no funciona bien, alguna quiebra existe en la estructura de un país cuando varios partidos con representación parlamentaria se ausentan, como ocurrió el pasado día 6, del homenaje a la misma Constitución que hace posible su presencia en el Parlamento nacional. Y algo funciona decididamente mal cuando esos partidos absentistas sostienen con sus votos al Gobierno de la nación de cuyo seno pretenden separarse. Ningún país serio otorga un protagonismo esencial en su gobernación a quienes proclaman sin ambages su incomodidad con la organización institucional que les proporciona cobijo, privilegio y vara alta en los asuntos de la cosa pública.

Ésta sería avería en el mecanismo del Estado se vuelve más relevante cuando se tiene en cuenta que un abrumador noventa por ciento de los ciudadanos tiene depositada su confianza política en dos partidos que comparten, al menos sobre el papel, un mismo proyecto nacional, cuya continuidad está teóricamente garantizada por esa comunidad de intereses básicos. Esta inmensa mayoría social que, en medio de su profunda y legítima discrepancia sobre los modos de gobernar y las ideas en torno a las que organizar el progreso colectivo, constituye el grueso de la nación española, se ve obligada en los últimos meses a contemplar, no sin notable perplejidad, la apertura de continuas crisis que ponen en cuestión no ya el modelo de convivencia contrastado a través de un cuarto de siglo de éxito democrático, sino las prioridades políticas de una ciudadanía interesada en soluciones eficaces a los problemas de una sociedad desarrollada en la Europa del siglo XXI.

De algún modo, y por razones que tienen que ver con el carácter improvisado de la victoria electoral del PSOE en las elecciones de marzo, tras la convulsión de los atentados de Atocha, la agenda nacional parece marcada por las prioridades caprichosas, insolidarias y abiertamente excluyentes del independentismo catalán, cuyo protagonismo en la vida pública española excede con mucho de lo razonable y entra de lleno en los recovecos del turbio mercado negro de la política. Pero el problema no es tanto de quienes se ven obsequiados con una preferencia desproporcionada a su peso real en el electorado, sino de quien, incapaz de componer un mapa de intereses adecuado a los de la mayoría, les otorga campo libre para el ventajismo y el chantaje.

Al situar el debate territorial -y muy en especial el de la autonomía catalana- en el centro de la vida política, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha desenfocado los intereses prioritarios del conjunto del país, y se ha arrastrado a sí mismo a una situación de incomodidad que su sectarismo no ha hecho sino agravar al empujar al PP, la otra gran fuerza de cohesión nacional, a la periferia de los asuntos de Estado. En vez de equilibrar el demarraje nacionalista buscando el consenso sobre problemas de envergadura, el PSOE ha partido en dos la política española con decisiones profundamente sectarias en aspectos cruciales, como la reforma del sistema de nombramiento de jueces o la dirección de la política exterior. El resultado es que, lejos de su proclamado talante de diálogo y transacción, ahora tiene enfrente la decidida oposición de un partido con casi diez millones de votos detrás, mientras se ve obligado a arrojarse en los brazos de unos grupos cuyo desafecto por el proyecto de España es tan patente como su voluntad de sacar partido de la debilidad gubernamental.

España debe afrontar a partir de enero un año decisivo. La negociación sobre la nueva Europa -en la que están en juego los billonarios fondos estructurales de la Unión- y la ratificación de la Constitución

comunitaria; la reforma de los Estatutos de autonomía, con el catalán en primer plano y lo que significa de nuevo diseño de un modelo de aceptable funcionamiento; las elecciones vascas con el plan secesionista de Ibarretxe al fondo; la amenaza terrorista en su doble vertiente islamista y etarra; o la propia reforma constitucional, tan alegre como quizá irresponsablemente anunciada en el discurso de investidura, representan un desafío tan complejo que nadie podría comprender que se aborde desde la debilidad política y la precariedad parlamentaria en que se mueve este Gobierno apuntalado por una coalición artificial y chirriante, con comunistas marginales y separatistas radicales.

Todos esos asuntos, y cada uno por separado, requerirían un consenso fundamental de la mayoría social que representan los dos grandes partidos nacionales. Pero el Gobierno ha volado los puentes de enlace con la oposición por su caprichoso empeño en sacar adelante un sistema de nombramiento de jueces cuya máxima virtud reside, no en que permitirá al Ejecutivo designar a sus candidatos -lo que ya sería grave-, sino en que impedirá que la oposición pueda sacar adelante los suyos. Para lograr ese mezquino objetivo, los socialistas han dinamitado todo atisbo de acuerdo y echado por tierra el necesario entendimiento transversal -por encima de ideologías- en que se basa todo proyecto serio de Estado.

La respuesta gubernamental a la abierta ruptura planteada por el PP como reacción a su forzada exclusión de las decisiones de rango consiste, según todos los indicios, en cimentar con carácter estable la errática coalición con la izquierda radical y el independentismo catalán. Una coalición heredada del tripartito que permitió a Maragall alcanzar la Presidencia de una Generalitat que no supo ganar en las elecciones, y que está condicionando hasta extremos inaceptables toda la política española.

Pero en esos aliados no encontrará Zapatero el apoyo que necesita para ciertos problemas de primera magnitud, como la aprobación de la Constitución europea o la reforma de la española, ni mucho menos para la construcción de una España solidaria y cohesionada. Antes al contrario, le van a sabotear -ya lo han hecho, como en la candidatura olímpica de Madrid- algunos proyectos cruciales, incapaces como son de manifestar un mínimo sentido de la generosidad o la visión de Estado. La pretensión de centralidad soñada por el presidente -PP a un lado, nacionalistas a otro- se vuelve una quimera cuando empiezan a hervir las papas de la política real y hace falta arrimarse al fuego para sacarlas antes de que se quemen. La política, que tanto tiene de juego, precisa de mucho tacto y fortuna a la hora de elegir a los compañeros de equipo.

director@abc.es